



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I. ¹, quince de marzo de dos mil veintitrés

Radicación n°.	05001 22 03 000 2023 00110 00
Proceso.	Conflicto – Aprehensión y entrega
Demandante.	RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento Comercial
Demandado.	Johan Edson Quirama Zapata
Procedencia.	Juzgados Dieciocho Civil Municipal de Medellín y Segundo Civil Municipal de Itagüí.
Decisión.	Dirime conflicto. Asigna competencia al Juzgado Segundo Civil Municipal de Itagüí.
Tema.	Factores de competencia. Competencia territorial del trámite de aprehensión y posterior entrega de garantía mobiliaria.
Rdo. interno.	014-23
Interlocutorio No.	056-23

I. ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Medellín y el Juzgado Segundo Civil Municipal de Itagüí, respecto del trámite de aprehensión y entrega de garantía mobiliaria interpuesta por RCI Colombia S.A., Compañía de Financiamiento Comercial, frente a Johan Edson Quirama Zapata.

II. ANTECEDENTES

1.- La sociedad RCI Colombia S.A., Compañía de Financiamiento Comercial, presentó solicitud de aprehensión y posterior entrega del vehículo de placas EOX428, de propiedad del deudor JOHAN EDSON QUIRAMA ZAPATA, sobre el cual éste había constituido garantía prendaria a favor de aquélla.

¹ Acto Legislativo 01 de 2021, art. 1º. “La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.”

2.- Dicho trámite le fue repartido al Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Medellín, el cual, mediante auto del 30 de enero de 2023, inadmitió la demanda, exigiendo:

“1. Manifestará claramente la ubicación del bien objeto de la garantía, siendo ello necesario para determinar la competencia territorial, además de permitir que se proceda con la comisión de la autoridad competente para la aprehensión.

2. De conformidad con lo exigido por el artículo 84, numeral 2° del C. G. del Proceso, se aportará certificado de existencia y representación de la parte demandante, con una fecha de expedición no superior a treinta (30) días, donde se acredite la calidad del señor JOSE WILLIAM LONDOÑO MURILLO, toda vez que en el aportado no se evidencia la posibilidad de conferir poder.”

Con el fin de cumplir con dichas exigencias, la apoderada judicial de la entidad solicitante, allegó memorial dentro del término legalmente concedido para tal efecto, expresando con relación al primer requisito:

“1. Se presume de buena fe que el vehículo se encuentra en la dirección del domicilio del demandado que es la CRA 64 # 56 - 08 de ITAGÜÍ. Pero se impone señalar que tratándose de controversias del linaje de la que aquí nos convoca, conforme lo ha precisado la jurisprudencia, la competencia corresponde a los juzgados civiles municipales o promiscuos municipales donde estén ubicados los bienes objeto de garantía mobiliaria para el cumplimiento de la obligación.”

Posteriormente, esto es, en proveído fechado el 14 de febrero de los corrientes, el citado Despacho Judicial rechazó la referida demanda, aduciendo su falta de competencia territorial, con fundamento en el numeral 14 del artículo 28 del Código General del Proceso, que establece como competente para la práctica de pruebas extraprocesales, de requerimientos y diligencias varias, será el juez del lugar donde ha de practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien deba cumplirse el acto de requerimiento o diligencia, según sea el caso; y que, como en este caso, se estaba solicitando una diligencia de aprehensión de un vehículo, el cual estaba siendo movilizado en el municipio de Itagüí, era sobre los jueces de esa localidad donde se radicaba la competencia, por lo que dispuso su remisión a los mismos.

3.- Recibido el referido trámite por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Itagüí, éste, mediante auto del 1° de marzo del año que transcurre, se rehusó a

avocar el conocimiento del mismo, aduciendo su falta de competencia en razón del lugar de cumplimiento de la obligación y acogiendo la designación hecha por la parte actora con fundamento en la posición de la Corte sobre la materia, dado que se había indicado en el acápite “*COMPETENCIA Y CUANTÍA*”, que “...la presente solicitud se radica en la localidad de registro del vehículo automotor, por lo cual se tramita dicha solicitud ante su despacho; es menester indicar que el rodante, puede estar al momento de la radicación en cualquier parte del territorio nacional, por tanto al momento de ejecutar la medida de aprehensión”, por lo que propuso el conflicto negativo de competencia y dispuso la remisión del mismo a esta Corporación para ser dirimido.

III. CONSIDERACIONES

1.- Competencia para dirimir el conflicto. Este Despacho es competente para conocer y decidir del presente conflicto por ser el superior funcional común de los dos juzgados en colisión, conforme lo establecido en el precepto 139 del Código General del Proceso, ya que ambos son de especialidad civil, de igual categoría y pertenecientes al distrito judicial de Medellín, pero de diferentes circuitos judiciales (Medellín e Itagüí).

2.- De la competencia. Es la aptitud legal que distribuye el conocimiento de los diferentes procesos en los distintos órganos judiciales, para lo cual se tienen en cuenta los factores *subjetivo*, que alude a la calidad de las partes; el *objetivo*, que se refiere a la naturaleza del asunto y a su cuantía; el *territorial*, que hace referencia al domicilio, lugar de ubicación de los bienes objeto de la demanda, entre otros; el de *conexión*, en razón del cual se permite acumular pretensiones que son competencia de diferentes jueces, en los casos expresamente contemplados en la ley; y el *funcional*, que tiene en consideración la categoría y jerarquía de los funcionarios, para que se cumpla con la doble instancia.

Con relación a la conexión, se ha establecido que no es un factor propiamente dicho para determinar competencia, si no que la altera o es una modalidad de desplazamiento de aquélla, pues permite que en casos particulares un pleito específico pueda ser conocido por un juez diferente al que inicialmente debería avocar dicho conocimiento, en atención a los criterios generales. El fundamento que tiene esta consagración, mayormente radica en la economía procesal y eficacia en el ejercicio de la administración de justicia.

Ahora, el artículo 28 del Estatuto Procesal Civil establece una serie de reglas que dan lugar a los llamados foros o fueros que determinan el sitio (competencia territorial), donde puede el ciudadano demandar o ser demandado y obtener el reconocimiento y la declaración judicial de sus derechos o la ejecución de los mismos; los aludidos foros, por expresa disposición legal y en atención a las circunstancias propias, operan de **manera privativa**, en caso de que se imponga repeliendo cualquier otro, o **concurrente**, cuando, por el contrario, coinciden con otro u otros sucesivamente, es decir uno a falta de otro, o por elección si se autoriza al actor para elegir entre varias opciones que la ley señala.

3.- De los conflictos de competencia. Ahora, previendo el legislador que, no obstante las reglas de competencia establecidas, el actor pudiese formular la demandante ante el juez que no fuera competente, el artículo 139 del Código General del Proceso, facultó a dicho funcionario judicial para que declarara su falta de competencia, y lo remitiera al que considerara lo fuera.

Ahora, si el operador jurídico que reciba el asunto en razón de la asignación hecha por otro funcionario, se considera igualmente incompetente para avocar su conocimiento, la misma preceptiva le confiere la posibilidad de proponer conflicto negativo de competencia, para que sea dirimido por el superior funcional común, siempre que el asunto no le haya sido remitido a éste último por quien resulte ser su superior funcional.

Dicho conflicto debe ser resuelto de plano, ordenándose en la respectiva providencia remitir el asunto al juez que deba tramitarlo, la cual carece de recursos.

4.- Caso concreto. Se presentó ante los jueces civiles municipales de Medellín (Reparto), solicitud de aprehensión y posterior entrega de garantía mobiliaria, siéndole asignado al Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Medellín, el cual, fincado en el numeral 14 del artículo 28 del Código General del Proceso, estimó su falta de competencia y consideró que la misma recaía sobre los jueces civiles municipales de Itagüí, a donde ordenó su remisión; sin embargo, el Juzgado Segundo Civil Municipal de esta localidad, a quien le fue repartido, declaró no ser competente, señalando que lo era el juez inicialmente escogido por el actor, en atención al lugar de pago de la obligación y, además, conforme jurisprudencia citada por éste en el líbelo genitor, en razón de que se había

afirmado que el vehículo objeto de la garantía podía circular por todo el territorio nacional.

Así las cosas, debe establecerse cuál de los funcionarios goza de aptitud legal para conocer el referido asunto, en atención al factor territorial que es el que generó la disputa en este caso, pues respecto de los demás no existe controversia.

Ahora, el artículo 28 del Código General del Proceso, como se indicó con antelación, establece las pautas para establecer la competencia por dicho factor, previendo como regla general su determinación por el fuero personal, esto es, que “...salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado”; no obstante, en el numeral 7º de la misma preceptiva, se contempla una excepción a dicha regla, para los casos en los que se ejerciten derechos reales, será competente, de modo privativo, **el juez del lugar donde estén ubicados los bienes** y que, de encontrarse en diferentes circunscripciones territoriales, lo será el de cualquiera de ellas, a elección del demandante, siendo esta última la aplicable al caso concreto, y no la enunciada en el numeral 14 de la citada norma, como lo adujo el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Medellín.

Al respecto, ha señalado de manera reiterada la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia²:

“...es necesario mencionar que si bien en el pasado la Corte aplicó el numeral 14 del artículo 28 del Código General del Proceso para resolver conflictos de competencia atinentes a diligencias de “aprehensión y entrega” 5, un replanteamiento del tema ha llevado a cambiar ese criterio, para en definitiva entender que en esa clase de peticiones propias de la modalidad de pago directo prevista en el artículo 60 de la Ley de Garantías Mobiliarias, ciertamente se está haciendo ejercicio del derecho real de prenda, a efecto de poder el acreedor satisfacer su crédito sin necesidad de acudir a los jueces, salvo, claro está, para que se retenga y entregue el bien pignorado y del cual carece de tenencia. Y en ese orden de ideas, la regla de competencia territorial, que de manera más cercana encaja en el caso, es la del numeral séptimo del artículo 28 de la Ley 1564 de 2012, la que a su vez posibilita cumplir con principios como los de economía procesal e inmediación, habida cuenta que al juez a quien mejor y más fácil le queda disponer lo necesario para la “aprehensión y entrega” es, sin duda, al del sitio en el que esté el bien objeto de la diligencia”

² Citada en auto AC1979 del 26 de mayo de 2021. Radicación 11001-02-03-000-2021-00556-00. Ver también AC2218-2019, del 10 de junio de 2019 y AC008-21 de enero 18 de 2021. Radicación 11001-02-03-000-2020-03528-00.

Clarificado que esta es la regla aplicable al caso concreto, resulta preciso entonces establecer el lugar en el cual se encuentra ubicado el bien objeto de la garantía que se está haciendo valer, y si los supuestos aducidos en el libelo genitor, y acogidos por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Medellín, encajan en los considerados por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, al pronunciarse sobre la competencia de estos asuntos, para estimar que al *sub judice*, resultaba procedente que la demandante pudiera optar por formular este trámite en cualquier lugar del territorio nacional.

Del estudio de la jurisprudencia emitida por la citada Corporación en asuntos semejantes, pudo evidenciar este despacho que efectivamente en determinados asuntos de aprehensión y entrega de garantía mobiliaria, ha definido la posibilidad del demandante de optar por presentar dicha solicitud en cualquier sede de la circunscripción nacional; sin embargo, ha señalado que no basta con la afirmación de que el vehículo puede circular en todo el territorio nacional para de manera indefectible conferir a la demandante dicha atribución, sino que en cada caso en concreto, además, se ha apoyado en las condiciones establecidas en el contrato con relación a la ubicación del bien dado en garantía, y/o en cualquier otro documento que acredite el lugar donde posiblemente se encuentra rodando el vehículo.

Es así como en el auto AC516-2022 del 21 de febrero de 2022³, expuso:

“4. Para el caso concreto, nótese que en el libelo introductorio la parte demandante manifestó que «desconoce el lugar exacto donde el Deudor y/o Garante tiene el bien mueble pignorado», por lo que, en su sentir, quedó habilitado para interponer la solicitud en cualquier parte del territorio, teniendo en cuenta que el automotor puede ser ubicado en cualquier lugar de la nación.

*Sin embargo, **dicha aseveración no es suficiente para establecer la competencia por el fuero real**, por lo genérico de su expresión y por estar desprovista de un sustento probatorio mínimo.*

*En estos casos, **se debe contrastar con los datos militantes en el expediente**, de acuerdo con los cuales, se puede deducir por lo menos de momento, que el vehículo materia de la garantía real está en el municipio de El Santuario (Antioquia), pues el contrato de prenda abierta sin tenencia, aporta un elemento para determinar que la competencia (privativa) es de la agencia judicial de ese municipio.*

Sobre el particular, nótese que en el literal f) de la cláusula sexta, se prevé

³ Radicación n.º 11001-02-03-000-2022-00348-00

que es obligación del garante “notificar a EL ACREEDOR GARANTIZADO cualquier cambio de residencia y oficina y de ubicación de vehículo”, sin que se observe en los anexos ningún documento en el que conste alguna manifestación en tal sentido, lo que lleva a colegir que Walther Arbey Gallo Zuluaga aún habita en ese municipio y por contera, que allí permanece el bien; por lo tanto, la competencia corresponde, privativamente, al juez de El Santuario.” (Resalto intencional).

Así las cosas, examinado el contrato de prenda sin tenencia con fundamento en el cual se invoca la aprehensión y posterior entrega del vehículo propiedad del demandado, puede advertirse que en la cláusula CUARTA se estableció:

“UBICACIÓN: El(los) vehículo(s) descritos (s) en la cláusula primera y objeto de esta prenda y garantía mobiliaria permanecerá(n) en la ciudad y dirección atrás indicados. EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) Y/O DEUDOR(ES) no podrá(n) variar el sitio de ubicación de(los) vehículo(s) dado(s) en prenda, sin previa autorización escrita y expresa de RCI COLOMBIA, pero gozará(n) del uso permanente del(los) mismo(s) para efectos de desarrollar su actividad circunstancia que autoriza RCI COLOMBIA.”

Y al verificarse ésta, se advierte que las direcciones indicadas con antelación a dicha cláusula son la del DEUDOR 1, JOHAN EDSON QUIRAMA ZAPATA, la del ACREEDOR GARANTIZADO y la del CONSTITUYENTE 1, mismo deudor, debiendo ser considerada como tal, la señalada para el deudor y constituyente por ser quien tenía la tenencia del vehículo gravado, la cual es “CRA. 64 # 56 – 08” del Municipio de Itagüí.

Por tanto, considerando que éste fue el lugar acordado contractualmente para la ubicación del bien dado en garantía, sin que de ningún otro elemento arrimado a la solicitud se evidencie que el deudor haya informado el cambio del mismo como lo exige la cláusula que viene de transcribirse, debe considerarse, por el momento, que se mantiene dicha ubicación, recayendo la competencia para conocer del presente asunto en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Itagüí.

A igual conclusión arribó la Corte, al definir la competencia en caso muy similar al que ahora se analiza⁴:

“El contrato de prenda sin tenencia y garantía mobiliaria arribado con el pliego introductor, en la cláusula cuarta denominada “ubicación” (fls. 8-11,

⁴ AC1464-2020 del 21 de julio de 2020. Radicado 11001-02-03-000-2020-00810-00.

c. 1) reza que:

[e]l(los) vehículos(s) descrito(s) en la cláusula primera y objeto de esta prenda y garantía mobiliaria, permanecerá(n) en la ubicación y dirección atrás indicados. EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) Y/O DEUDOR(ES) no podrá(n) variar el sitio de ubicación del(los) vehículo(s) dado(s) en prenda, sin previa autorización escrita y expresa de RCI COLOMBIA (...). (subrayado ajeno al texto).

Al respecto el documento aludido refiere 3 direcciones a saber: la primera, da cuenta de que el deudor tiene por domicilio la carrera 49 # 76-38 de Medellín; la otra, señala el de la constituyente en la carrera 49 # 76-38 de “Nechí”; y finalmente, el de la acreedora, esto es, la carrera 49 # 39 sur - 100 de Envigado. La última “dirección” deber ser descartada para los efectos de la cláusula aludida, en la medida en que resulta obvio que la garantizada no tiene la tenencia del bien. Las otras dos podrían generar en primer momento confusión como quiera que se hace referencia a una misma nomenclatura pero en dos municipalidades distintas; sin embargo, la eventual disparidad se resuelve si en cuenta se tiene que la solicitud se identificó en el aparte “notificaciones” que “la garante recibirá notificaciones en la dirección física CR 49 # 76-39 de la ciudad de Medellín” (fl. 27, dno.11).

De allí se colige que la “ubicación” del vehículo convenida por las partes, coincide con el “domicilio” del deudor y de la constituyente de la garantía, pues al no haberse informado por la acreedora que autorizó el cambio de lugar de permanencia del rodante, genera, al menos liminarmente, una presunción de certidumbre sobre su localización.”

CONCLUSIÓN.

Corolario con lo expuesto, la competencia para conocer de la solicitud de aprehensión y entrega de la garantía mobiliaria, recae en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Itagüí, por ser éste el lugar de ubicación del vehículo dado en prenda, de acuerdo con las condiciones del contrato, sin que exista prueba de su variación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,

RESUELVE.

PRIMERO. DIRIMIR el actual conflicto de competencia, en orden a **DECLARAR COMPETENTE** al Juzgado Segundo Civil Municipal de Itagüí, para conocer de la solicitud de aprehensión y posterior entrega de garantía mobiliaria, formulada por RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, en contra de Johan Edson Quirama Zapata, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. SE ORDENA a la Secretaría que remita el presente asunto al citado despacho judicial, e informe lo acá decido al Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Medellín.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO
Magistrado